

Ley

18-88

SOBRE EL IMPUESTO AL PATRIMONIO
INMOBILIARIO (IPI)

EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

LEY 18-88 SOBRE EL IMPUESTO AL PATRIMONIO INMOBILIARIO (IPI)

Del 5 de Febrero del 1988 Publicada el 26 de febrero del 1988 Santo Domingo, D. N

MODIFICADA POR LA LEY NO. 253-12 D/F 09-11-2012.

CONSIDERANDO: Que uno de los desequilibrios de nuestro actual sistema tributario es que

sus ingresos dependen fundamentalmente de los impuestos que inciden sobre los bienes muebles

y servicios con exclusión de la propiedad inmueble suntuosa:

CONSIDERANDO: Que la creación de un impuesto que grave la vivienda suntuaria redundará

en una mayor distribución de la riqueza en implementará los ingresos del Estado, para sustentar

programas de viviendas a favor de las clases más necesitadas.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

IMPUESTO AL PATRIMONIO INMOBILIARIO (IPI)

Artículo 1. (Modificado por la Ley No. 253-12 de fecha 09 de noviembre del 2012). Se

establece un impuesto del uno por ciento (1%) sobre el patrimonio inmobiliario total de las

personas físicas, el cual será determinado sobre el valor que establezca la Dirección General de

Catastro Nacional.

Artículo 2. (Modificado por la Ley No. 253-12 de fecha 09 de noviembre del 2012). El

patrimonio gravado con el impuesto previsto en el Párrafo I del artículo 1 es el siguiente:

a) El compuesto por inmuebles destinados a viviendas pertenecientes a personas físicas, cuyo

valor en conjunto, incluyendo el del solar donde estén edificados, sea superior a seis millones

quinientos mil pesos (RD\$6,500,000.00).

b) El compuesto por solares urbanos no edificados y aquellos inmuebles no destinados a

viviendas, incluyéndose como tales los destinados a actividades comerciales, industriales y

profesionales, pertenecientes a personas físicas, cuyo valor en conjunto sobrepase los seis

millones quinientos mil pesos (RD\$6,500,000.00).

c) El compuesto por la combinación de a y b, cuyo valor en conjunto sobrepase los seis millones

quinientos mil pesos (RD\$6,500,000.00).

Párrafo I. El monto establecido en los literales a, b y c del presente artículo será ajustado

anualmente por la inflación publicada por el Banco Central de la República Dominicana.

Párrafo II. Se reputará como solares urbanos no edificados todos aquellos en los que no se haya

levantado una construcción formal legalizada por los organismos competentes (Ministerio de

Obras Públicas y Comunicaciones, ayuntamientos municipales y los demás contemplados por las

leyes o resoluciones del gobierno), destinados a viviendas o actividades comerciales de todo tipo

y aquellos cuyas construcciones ocupen menos de un 30% de la extensión total de dicho solar.

Párrafo III. Queda excluida de este impuesto aquella vivienda cuyo propietario haya cumplido

los sesenta y cinco (65) años de edad, siempre que dicha vivienda constituya el único patrimonio

inmobiliario de su propietario.

Párrafo IV. Queda establecido que el presente impuesto sólo grava el solar y las edificaciones

de los inmuebles gravados y en consecuencia no formarán parte de la base imponible los terrenos

rurales dedicados a la explotación agropecuaria, así como tampoco el mobiliario, los equipos,

maquinarias, plantas eléctricas, mercancías y otros bienes muebles que se encuentren dentro de

los inmuebles gravados.

Artículo 3. (Modificado por la Ley 288-04 de fecha 28 de septiembre del 2004). Tasa. Los

inmuebles alcanzados por este impuesto estarán gravados con un uno por ciento (1%) del valor

determinado para los mismos. Para el caso de los inmuebles a que se refiere el literal a) y literal

b) del Artículo 2 de la presente ley, esta tasa se aplicará sobre el excedente del valor del

inmueble, luego de deducidos los cinco millones de pesos (RD\$5,000,000.00) no gravados.

*

Nota: La deducción aplicable para este artículo es según lo establecido en el artículo 2 de la presente Ley que fue modificada

por el artículo 14 de la Ley No. 253-12.

Artículo 4. Este Impuesto será pagadero por el propietario en cuotas semestrales, dentro de los

primeros diez (10) días del mes siguiente a la fecha de pago en la Colecturía de rentas Internas

correspondiente, o en la Tesorería Municipal en donde no hay Colecturía, en efectivo o en

Cheque certificado a nombre del colector de Rentas Internas correspondiente. Cuando este

impuesto no sea pagado dentro del plazo señalado, se impondrá un recargo de un dos por ciento

(2 %) mensual, sobre el monto vencido o impagado.

Párrafo I. En los casos de viviendas cuyas mejoras hubieran sido construidas con préstamos a

largo plazo con garantía hipotecaria y siempre que sea habitada por su propietario o por una de

las personas señaladas en el párrafo del artículo 3 de esta Ley, quedarán exentas del impuesto

hasta que hayan amortizado por lo menos, el (50%) del préstamo original.

Párrafo II. El valor de este (50%) amortizado será aplicable sólo sobre los préstamos originales

para la adquisición, construcción o remodelación de la vivienda, a la fecha de la promulgación de

esta Ley y no sobre los otorgados con posteridad a la misma.

Artículo 5. La modificación del Status de una vivienda a punto comercial debe ser autorizada

por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio quien expedirá una certificación a solicitud

del propietario, para depositarla en la Dirección General del Catastro, a los fines de excepción de

este impuesto. Cuando sea realizada una ampliación, remodelación y decoración para el uso

comercial, la certificación de que se trata debe ser expedida por el ayuntamiento correspondiente.

Esas certificaciones estarán exentas del pago del impuesto sobre documentos.

Artículo 6. Estarán exentos del pago de este impuesto las edificaciones y solares de:

- a) Estado dominicano
- b) Las instituciones Benéficas
- c) De Organizaciones Religiosas
- d) Residencias Diplomáticas propiedad de un gobierno extranjero o de un organismo

internacional, debidamente acreditado en el país mediante certificación expedida por el

Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

Artículo 7. El propietario de una vivienda o solar urbano no edificado, estará obligado a

presentar anualmente en los primeros sesenta (60) días del año, ante la Dirección General del

Impuesto sobre la Renta, una declaración Jurada sobre el valor de la o la vivienda gravada con

este impuesto, conjuntamente con cualquier documento que a juicio de dicha Dirección General,

sea necesario para valorar esos inmuebles, con los datos necesarios para su identificación y

cuantificación y deberá pagar en ese lapso, sus primeras cuotas semestrales, a penas del recargo

establecido en el artículo 4 de esta Ley.

Párrafo I. Esta Declaración deberá estar acompañada de la correspondiente certificación de

avalúo expedida por la Dirección general de catastro.

Párrafo II. La entrega de las declaraciones Juradas y de los demás documentos exigidos, así

como el pago del impuesto, se harán en la colecturía de Rentas Interna principal, cuando la

vivienda se encuentre ubicada en el Distrito Nacional, o en las Colecturías de Rentas Internas o

en las Tesorerías Municipales, en los demás casos.

Artículo 8. La Dirección General de Impuesto sobre la renta está facultada para verificar la

Declaración Jurada y las certificaciones u otros documentos exigibles y en caso de advertir

diferencias en el valor que afecten el monto del impuesto a pagar, que no sean errores materiales

o de cálculos, las impugnará y notificará por escrito al propietario de la vivienda, responsable de

esta Declaración, quién será pasible del cumplimiento de las sanciones contenidas en la Ley

orgánica de Rentas Internas No. 855, de fecha 13 de marzo de 1935, así como de las que esta Ley

establece.

Párrafo I. Igualmente, la Dirección general del Impuesto sobre la Renta estimará de oficio la

cuantificación del valor de la vivienda y el monto del impuesto, en caso de que su propietario no

haga a tiempo su declaración Jurada, la haya hecho mal o incompleta o se niegue a declarar. A

esos fines, la Dirección General utilizará los medios que la Ley establece y cobrará el impuesto

exigido más un recargo de un 25% (veinticinco por ciento) sobre el monto del impuesto estimado

hasta el primer mes de retardo en declarar, más un 5% (cinco por ciento) por cada mes o fracción

de mes adicional de retraso en declarar o pagar.

Artículo 9. Si el propietario no está conforme con el valor del inmueble estimado y fijado la

Dirección General del Impuesto sobre la Renta, podrá recurrir ante el Secretario de Estado de

Finanzas por escrito motivado, dentro de un plazo de Díez días (10) a contar de la notificación

del avalúo por parte de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, previo pago de las

cuotas correspondientes al momento de elevar el recurso.

Párrafo I. En vista de esta declaración, el Secretario de Estado de Finanzas obtendrá toda la

información que juzgue pertinente para el estudio y decisión del caso, asíéndose asistir por la

comisión de avalúo señalada más adelante que determinará y fijará el valor del inmueble.

Párrafo II. Si el interesado demuestra disconformidad con la resolución que a los efectos dicte

el Secretario de Estado de Finanzas, podrá recurrir ante el tribunal superior Administrativo.

Artículo 10. Habrá una comisión revisora del avalúo que tendrá a su cargo la fiscalización y

revisión de los expedientes de inmueble que será objeto de apelación; y suministrarán al

Secretario de Estado de Finanzas todas las informaciones que juzguen pertinentes para el estudio

y revisión del caso.

Dicha comisión estará compuesta de parte del sector público, por el Secretario de Estado de

Obras Públicas y Comunicaciones, quién la presidirá, el Secretario de la Liga Municipal

Dominicana, el Director General de Catastro Nacional y el Administrador General del Banco

Nacional de la Vivienda, quienes podrán hacerse representar por los funcionarios designados por

ellos. El sector privado estará representado por un funcionario de la Liga de Asociaciones de

Ahorros y préstamos, y un representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y

Agrimensores.

Párrafo I. Esta comisión de avalúo se reunirá por convocatoria que hará el Secretario de Estado

de Finanzas por intermedio de su consultor jurídico, Secretario de dicha comisión, para conocer

de los casos de disconformidad con los montos fijados por la Dirección General de Rentas

Internas, y sus decisiones fundamentarán la resolución que dicte el Secretario de Estado de

Finanzas.

Artículo 11. A partir de la publicación de la presente Ley, los Notarios Públicos o quienes hagan

sus veces, no instrumentarán ningún acto relativo, ni de cualquier otro modo concerniente a

inmuebles sujetos al pago de este impuesto, incluyendo las particiones y liquidaciones de

cualquier naturaleza, enajenaciones, comunidades, sucesiones, arrendamientos, hipotecas, etc., si

no se les muestra el recibo que acredite que la última cuota semestral que corresponda, al

momento del acto ya ha sido pagada. En ningún caso los Notarios o quienes hacen sus veces

retendrán el recibo de pago del impuesto y se limitarán a dejar constancia en los actos que

instrumentes del número y fecha de dichos recibos.

Artículo 12. Los tribunales no aceptarán como medio de prueba, ni tomarán en consideración,

títulos de propiedad sometidos al pago de este impuesto, sino cuando juntamente con esos títulos

sean presentados los recibos correspondientes al último pago del referido impuesto ni se

pronunciarán sentencias de desalojo, ni desahucio, ni levantamiento de lugares, ni se fallarán

acciones petitorias, ni se acogerán acciones relativas a inmuebles sujetos a las previsiones de esta

Ley, ni en General darán curso a ninguna acción que directa o indirectamente afecten inmuebles

gravados por esta Ley, sino se presenta, juntamente con los otros documentos sobre los cuales se

basa la demanda, el último recibo que demuestre haberse pagado sobre el inmueble de que se

trata, el impuesto establecido por esta Ley.

La sentencia que haga mención de un título o que produzca un desalojo, acuerde una

reivindicación, ordene una petición o licitación, deberá describir el recibo que acredite el pago

del impuesto correspondiente.

Artículo 13. Los funcionarios públicos ante quienes se efectúe la subasta de inmuebles

sometidos a éste impuesto solicitarán a la Dirección General del Impuesto sobre la Renta una

certificación, que la expedirá de oficio, de que los impuestos y recargos previstos por esta Ley

han sido pagados. En caso de que no hayan sido pagados, el monto adeudado será agregado al

precio de venta y no se expedirán títulos ni copias de las adjudicaciones sino cuando previo pago

del impuesto se hayan obtenido el o los recibos de saldo, a fin de hacer mención de estos recibos

en los títulos o en la copia de la adjudicación.

Artículo 14. El Tribunal de Tierras no adjudicar ningún derecho o interés sobre los bienes

inmuebles sujetos a este impuesto y sometidos a su jurisdicción, sino cuando se le haya

demostrado que el pago ha sido efectuado.

Artículo 15. Los conservadores de hipotecas y registradores de títulos no transcribirán, ni

registrarán actos relativos a inmuebles sometidos al pago de este impuesto, sino se les presenta el

recibo que aprueba que ha sido pagado el impuesto, de lo cual se hará mención en el asiento de

sus libros.

Artículo 16. Los registradores de títulos no expedirán el duplicado del certificado de títulos a la

persona a quien corresponda el derecho a menos que se le presente el recibo de pago

correspondiente, que devolverán después de haber puesto su número y fecha al margen del

certificado y del duplicado. Después del primer registro los registradores de títulos no inscribirán

ningún documento que contenga traspaso de un inmueble o la constitución de una hipoteca o su

cancelación, o la constitución de cualquier derecho, carga o gravamen voluntario sobre un

inmueble registrado si no se le presenta el recibo de pago de la cuota duodécima correspondiente.

Artículo 17. El producido del impuesto establecido por la presente Ley, será utilizado para

financiar programas habitacionales del Estado, así como para hacer más eficiente las atribuciones

y funciones de la Dirección General de Catastro. El 20% restante será especializado para los

ayuntamientos del país, y su distribución será de acuerdo a la Ley No. 140.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los

diecinueve días del mes de enero del año mil novecientos ochenta y ocho; años 144 de la

Independencia y 125 de la Restauración.

18-88

In "18-88," a groundbreaking law is introduced to address the inequities of the current tax system by imposing a property tax on luxury real estate, aiming to redistribute wealth and enhance state revenue. This legislation not only targets high-value residential and commercial properties but also establishes strict compliance requirements for property owners. The funds generated from this tax are dedicated to financing housing programs for the underprivileged, reshaping the landscape of social equity in the Dominican Republic.